



## SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Demandante:** DORA ESTELA OQUENDO ZULETA  
**Demandado:** COLPENSIONES Y OTRO  
**Procedencia:** JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Providencia:** SENTENCIA n.º 0030  
**Radicado n.º:** 05001-31-05-004-2020-00142-01 (O2-22-449)

En Medellín, a los seis (06) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022 y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES**, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**, y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad pública accionada, dentro del proceso ordinario instaurado por **DORA ESTELA OQUENDO ZULETA** en contra de **COLPENSIONES** y **COLFONDOS S.A.**, proceso con radicado n.º 05001-31-05-004-2020-00142-01 (O2-22-449).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la siguiente sentencia que en derecho corresponda.

### 1. ANTECEDENTES

Mediante vocera judicial, la litigiosa por activa **DORA ESTELA OQUENDO ZULETA** pretende la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, y de consiguiente, la reactivación de la afiliación en Colpensiones sin solución de continuidad, la devolución de todos los aportes cotizados, incluyendo los rendimientos, sin descontar gastos de administración, y las costas del proceso, en cuyo sustento fáctico señaló que nació el 19 de mayo de 1959; que laboró en el Municipio de Ituango desde el 19 de septiembre de 1979 hasta el 2 de noviembre de 1998, siendo dicho ente territorial quien estuvo a cargo de dichos tiempos de servicio; que en 1998 se afilió al RAIS a través de la AFP COLFONDOS S.A.; que al momento de la afiliación no se le indicaron cuáles eran los beneficios del

RPMPD y se omitió informarle cuáles eran las consecuencias negativas de su afiliación; y que el 13 de noviembre de 2019 solicitó a COLPENSIONES el traslado de régimen, el cual fue denegado mediante comunicado del 18 de noviembre de 2019.

### **1.1 TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

La demanda fue admitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 10 de marzo de 2020 (doc. 01 pág. 121), con el cual ordenó su notificación y traslado a la parte accionada.

El extremo pasivo de la relación procesal COLFONDOS S.A. contestó la demanda (doc. 02) a través de mandatario judicial, en la que manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda, como quiera que la afiliación se presentó en virtud al derecho de la demandante a escoger libremente el fondo de pensiones que administra sus aportes, siendo el RAIS su elección, luego de que los asesores comerciales de COLFONDOS le brindaran una asesoría integral y completa respecto de todas las implicaciones de su traslado, las características del RAIS, y las diferencias entre éste y el Régimen de Prima Media con Prestación Definida; al tiempo de proponer las excepciones de mérito que rotuló: inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, ausencia de vicios del consentimiento, validez de la afiliación al RAIS, ratificación de la afiliación, compensación y pago.

Por su parte, COLPENSIONES contestó la demanda por intermedio de gestora judicial (doc. 03), oponiéndose a las pretensiones incoadas, puesto que al suscribir el formulario de afiliación al RAIS, la demandante lo hizo en uso del principio de libre escogencia consagrado en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, literal b. Seguidamente, propuso como medios exceptivos de mérito los que designó: inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir pensión de vejez a COLPENSIONES, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del traslado de régimen, inexistencia de ineficacia de la afiliación a la AFP, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante COLPENSIONES, indebida aplicación del artículo 1604 del C.C., desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, desconocimiento del precedente judicial, equivalencia del ahorro o diferencias pensionales, devolución de aportes debidamente indexados, devolución de cuotas de administración indexadas, buena fe, prescripción, compensación, imposibilidad de condena en costas a COLPENSIONES, y condena en costas a la demandante.

## **1.2. DECISIÓN DE PRIMER GRADO**

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 10 de noviembre de 2022 (docs. 10 a 12), con la que el cognoscente de instancia declaró la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS a través de la AFP COLFONDOS S.A., ordenando a ésta devolver a COLPENSIONES todas las sumas que recibió con ocasión de la afiliación y que obran en la cuenta de ahorro individual, como aportes, cotizaciones y rendimientos financieros, además de lo descontado por primas de seguros previsionales, aportes para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y por gastos de administración, descuentos que deberá retornar con la debida indexación, así como condenó a COLPENSIONES a recibir las sumas materia de devolución, a tener a la demandante como su afiliada sin solución de continuidad, a la vez de gravar en costas a COLFONDOS S.A. a favor de la demandante.

## **1.3. CONSULTA**

Por haber sido la decisión de instancia desfavorable a los intereses de COLPENSIONES, y al no haber sido objeto de apelación, se analizará integralmente la sentencia en el grado jurisdiccional de consulta en su favor.

## **1.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En la oportunidad para alegar de conclusión en segunda instancia, la apoderada judicial de COLPENSIONES allegó escrito contentivo de alegatos de conclusión, en el que señala la declaración de ineficacia del traslado es injustificada y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, a más de poner en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados. En subsidio, solicita que garantizar el traslado de todo concepto de dinero que repose en la cuenta de ahorro individual de la demandante, ordenado el traslado de las cuotas de administración, gastos de administración, aportes a la garantía de pensión mínima, de manera indexada.

## **2. ANÁLISIS DE LA SALA**

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, en los puntos no apelados, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

## 2.1 PROBLEMA JURÍDICO:

El *thema decidendi* en la presente Litis se circunscribe en definir: ¿Si procede la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional de la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por COLFONDOS S.A.?, y en caso afirmativo, ¿Cuáles son los efectos jurídicos que devienen de la ineficacia del traslado?

## 2.2 TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio** en cuanto a la declaración de ineficacia de la afiliación y traslado de régimen pensional a la AFP demandada, siguiendo la tesis de que no se le brindó al actor la asesoría integral y cualificada que pregonaba el precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y en cuanto a la integralidad de las consecuencias jurídicas que conlleva la devolución de las cotizaciones, esto es, que se debe ordenar el traslado de los descontados por seguros previsionales, por el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, y por gastos o comisiones de administración, a la par de que tales descuentos deben retornar al RPMPD de manera indexada, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

### 2.2.1 Ineficacia del traslado del RPM al RAIS

En lo que interesa a la litis, no es objeto de discusión que la accionante se desempeñó como servidora pública del Municipio de Ituango, Antioquia, desde el 16 de septiembre de 1979 (doc. 01 pág. 15 y ss.), sin aportes a cajas o fondos, por lo que el responsable de esos tiempos es dicha entidad territorial; que no fue beneficiaria del régimen de transición ni por edad (doc. 01 pág. 14), aunque sí por tiempo de servicio (doc. 01 pág. 15 y ss.); que se afilió al RAIS a través de la AFP COLFONDOS S.A., el 1º de noviembre de 1998 (doc. 02 pág. 19); y que solicitó a COLPENSIONES el traslado de régimen el 13 de noviembre de 2019 (doc. 01 pág. 33), mismo que le fue denegado mediante comunicados del mismo día (doc. 01, pág. 43) y del 18 de noviembre de 2019 (doc. 01 pág. 44 y ss.).

Para resolver de fondo la Litis, sea lo primero señalar que este juzgador plural viene acogiendo el criterio jurisprudencial sostenido antaño por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia y desarrollado desde el año 2008 con la sentencia de radicación n.º 31989 del 9 de septiembre de 2008 hasta la más reciente sentencia SL2229-2022, línea jurisprudencial en la que se haya el precedente judicial por seguir, de donde se desprende que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones es un deber ineludible desde su creación; que la suscripción del formulario de

afiliación es insuficiente para probar el cumplimiento de tal deber, requiriéndose la prueba del consentimiento informado; que la carga de la prueba le corresponde a las AFP, por virtud de su inversión a favor de la afiliada como parte débil de la relación jurídica contractual, y que el alcance de la jurisprudencia laboral citada, permite aplicarla a todos los eventos de traslado de régimen pensional, sin importar que el derecho esté consolidado, sea beneficiaria del régimen de transición, o esté próxima o no a pensionarse.

En esa misma dirección, preciso es relieves por la Sala que para la fecha del traslado de régimen pensional el 21 de junio de 1995, la AFP accionada tenía la obligación de brindar información detallada en cumplimiento de lo normado en los artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, y 97 numeral 1° del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003, lo que en palabras de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1217-2021, consiste en: *“ilustrar a sus potenciales afiliados, en forma clara, precisa y oportuna, de las características de cada uno de los dos regímenes pensionales, con el fin de que pudieran tomar decisiones informadas. (...) suministrar (...) una ilustración suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna sobre las implicaciones de abandonar el esquema de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras. (...) proporcionar (...) una ilustración acerca de las condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes, lo que incluye la existencia de una transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.”*

Conforme los anteriores basamentos legales y jurisprudenciales, tenemos que, en lo concerniente a la afiliación inicial, se allegó el correspondiente formulario de afiliación (doc. 02 pág. 19), el cual no fue desconocido ni tachado por la parte actora; empero, tal probanza no refleja que se haya presentado la asesoría cualificada exigida, y por contera, no es posible concluir que la AFP cumpliera con los mínimos de transparencia, claridad y completitud en la información que debía ser suministrada, en tanto no basta explicar los beneficios y características de cada uno de los regímenes, sino también las consecuencias adversas del traslado de régimen, de cuya explicitud no hay prueba alguna, previo al momento de efectuarse el traslado o a la sazón de este.

En este punto, estima pertinente la Sala acotar que si la AFP demandada no cuenta con ningún soporte documental para la fecha del traslado de régimen, al brindarle al actor información únicamente de manera verbal, tal circunstancia deja entrever una clara contravención de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, pues no basta con allegarse un formato pre-impreso de vinculación cumpliendo con los requisitos formales que indica la Superintendencia Financiera de Colombia, sino que se requiere acreditar la efectiva asesoría integral brindada en la antesala del traslado de régimen, ilustrando al

interesado sobre las características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, apercibiendo a la promotora del juicio de que para optar por la pensión anticipada antes de la edad mínima debía efectuar aportes voluntarios adicionales o extraordinarios a las deducciones de ley por cotizaciones; que para causar la pensión de vejez se debe contar con una suma dineraria mínima en la cuenta de ahorro individual; que la existencia de eventuales beneficiarios por sobrevivencia incrementan dicha suma mínima requerida, entre otras particularidades, puesto que *in fine* la asesoría no debe estar encaminada a persuadir a la afiliada con llamativos rendimientos financieros o la posibilidad de acceder a la pensión sin importar la edad, sino que debe orientarse también a que la afiliada pueda lograr la prestación económica que mejor se acompañe con sus expectativas pensionales y densidad cotizacional.

Ahora, si bien la litigiosa por activa de la relación procesal acepta en el interrogatorio que antes de suscribir el formulario de afiliación un asesor de la AFP le brindó una asesoría (min. 53:00), no puede pasar de soslayo la Sala que el deber de información únicamente se satisface con la evidencia de que la decisión de la afiliada haya sido libre e informada, lo que no se logra acreditar por la AFP accionada, puesto que por el contrario, la accionante enfatizó que la asesoría brindada previamente a la afiliación fue superficial, fragmentaria y de corta duración (min. 54:00), indicándosele principalmente que el ISS se iba a acabar (min. 53:30) y que podría acceder a una pensión anticipada (min. 54:30), pero sin expresarle cuáles eran las características puntuales y comparativas del RAIS y del RPMPD, ni las posibles desventajas de su traslado de régimen pensional.

En lo concerniente a las re-asesorías para el traslado entre AFP del mismo régimen, esta Sala ha sido del criterio de que las mismas no convalidan el acto jurídico irrito del traslado, por manera que aún bajo el supuesto de que el 27 de noviembre de 2019 hubiere sido informada sobre el posible monto de sus mesadas pensionales por vejez en el RAIS (doc. 01 pág. 51), ello no podría, *per se*, tener la virtualidad de subsanar o convalidar las falencias de información al momento del traslado de régimen pensional. A este respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tuvo la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos: *“la Sala considera que este servicio no tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado, por dos razones: (...) porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, la afiliada requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga*

*oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información”* (SL1688 de 2019).

Es de resaltar que la AFP del régimen de ahorro individual con solidaridad a la que se afilió y trasladó la pretensora, no desplegó actividad probatoria alguna enderezada a demostrar que el ejecutivo de servicios que atendió a la litigiosa por activa cumpliera con su deber legal de suministrar información clara, completa y comprensible al potencial la afiliada, quebrantándose así lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994, pues por el contrario, la falta de soporte documental o archivo de la historia laboral de que trata el artículo 38 del Decreto 692 de 1994 permite inferir que, el traslado de régimen pensional no se ciñó a los parámetros legales y jurisprudenciales, sin que resulten suficientes las manifestaciones ambiguas y generalizadas hechas por el extremo litigioso activo en desarrollo del interrogatorio de parte, y menos aún, las referidas a la condición académica o nivel de instrucción de la demandante frente a un tema de alta complejidad como lo es la liquidación y cálculo de una mesada pensional, como también las referidas a que la afiliada no haya realizado indagaciones por su cuenta de su situación pensional, en tanto el deber de brindar tal información privilegiada corresponde *ope legis* a la AFP.

De igual forma, en el mismo precedente judicial en cita, la Corte Suprema de Justicia estudia la excepción de saneamiento de la nulidad relativa, precisando que el cambio de régimen pensional debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales, salvo en lo relativo a las consecuencias prácticas, esto es, el restablecimiento del status quo, indicando que: *“a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos”*.

Así las cosas, habrá de confirmarse la decisión de instancia en este tópico, en cuanto con acierto declaró la ineficacia de la afiliación efectuada por el demandante al RAIS.

### **2.2.2 Traslado de las cotizaciones**

A este respecto, es preciso indicar que tal devolución debe ceñirse a los términos del artículo 1746 del Código Civil, en consonancia a lo pregonado por la jurisprudencia del máximo tribunal de esta jurisdicción, en sentencias como las SL31898 de 2008, SL4989-2018 y SL1429-2019, al tiempo que COLPENSIONES tiene el deber de recibir las cotizaciones, sin que el hecho de que dicha entidad sea un tercero la imposibilite para recibir los aportes, por la simple y llana razón de que esta entidad administra el régimen de prima media con

prestación definida, y atendiendo a que de conformidad con el artículo 12 de la Ley 100 de 1993 los dos regímenes de pensiones si bien coexisten son excluyentes, y por tanto, una vez declarada la ineficacia del traslado en el RAIS, consiguientemente la AFP deberá devolver a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, independientemente de si la parte actora estuvo afiliada al ISS con antelación a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

En el anterior contexto, la Sala estima pertinente resaltar las prédicas de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como en la sentencia SL2877-2020, en la que se recapitulan las implicaciones y consecuencias de la declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS, de la cual se trasuntan los apartes pertinentes:

*“i) que ésta involucra la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual, en el sentido que debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida;*

*ii) que ello incluye el reintegro a Colpensiones, además de lo consignado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y los bonos pensionales, lo recaudado por gastos de administración y comisiones debidamente indexados durante todo el tiempo que el demandante permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima.*

*iii) que los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, conlleva que todas las cotizaciones efectuadas por la promotora del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones.”*

Así pues, la ineficacia del traslado conlleva precisamente a que el fondo privado de pensiones devuelva todas las cotizaciones que hubiere recibido, incluyendo lo correspondiente al porcentaje que por gastos o comisión de administración haya descontado de las cotizaciones, así como también lo descontado para el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima (Decreto 3995 de 2008 artículo 7, Sentencia SU-062 de 2010) y las sumas de la aseguradora (primas previsionales), pues carecería de sentido y objeto la declaratoria de ineficacia por la falta de la información exigida, de no trasladarse de manera íntegra las cotizaciones efectuadas, viéndose favorecida la AFP sin razón financiera atendible, habida



cuenta que a pesar de que tales descuentos tuvieron un origen legal y sirvieron en su momento a un propósito jurídicamente preestablecido como el aseguramiento de los riesgos de invalidez y muerte, la administración financiera de las cotizaciones o el fortalecimiento de un fondo de garantía, aquellos nunca hubieran sido detraídos por la AFP de no haberse verificado la afiliación y traslado de régimen pensional.

En esa misma dirección, esta Sala considera que hay lugar al traslado de todas las cotizaciones y sus rendimientos a COLPENSIONES, a propósito de que engrosen el fondo común de naturaleza pública, según las previsiones contenidas en el artículo 32 de la Ley 100 de 1993, de modo que, se garantice no solo la sostenibilidad financiera del sistema sino también la efectividad del principio de solidaridad de que trata el artículo 2 *ibídem*. Por demás, no hay lugar a reconocer restituciones mutuas, pues como se predica en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia atrás referenciada, se deben devolver todos los rubros descontados de las cotizaciones, y si bien no soslaya esta Sala que existe un pronunciamiento de la Superintendencia Financiera en torno del tema, es preciso indicar que tal acto aborda es el traslado de régimen pensional por voluntad propia y no en virtud de la declaratoria de su ineficacia, además de no ser de obligatorio acatamiento para los operadores judiciales; de ahí que, la Sala se aviene es al precedente jurisprudencial que en derredor del tema ha establecido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como ampliamente quedó expuesto en líneas anteriores.

Así mismo, debe ordenarse que la devolución de los descuentos de manera indexada, atendiendo a que si bien aquella no fue impetrada con la demanda, esto es, no fue materia de debate en el presente proceso, debe procederse a su reconocimiento oficioso, en tanto en cuanto que ello no se traduce en una condena sino en el reconocimiento del efecto de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda de las sumas descontadas de las cotizaciones por los rubros atrás descritos por el transcurso del tiempo, prohijándose el criterio jurisprudencial expuesto en la reciente sentencia SL950-2022 emitida por la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

Ello así, habrá de confirmarse íntegramente la sentencia de primera instancia, en el sentido de que la AFP debe trasladar además de los descuentos por gastos o comisiones de administración, por sumas de la aseguradora (primas previsionales) y por aportes al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, en forma indexada.

### 2.2.3 Excepción de prescripción

En cuanto a la excepción de prescripción propuesta, se memora que “la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, debido a que con esta declaración se busca comprobar o constatar un estado de cosas - carencia de efectos jurídicos del acto de afiliación y traslado de régimen pensional desde su génesis con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360- 2019 y CSJ SL373-2021).” (SL3871-2021), a más de que esta Sala ha sido del iterativo criterio que en esta clase de procesos, las consecuencias de la declaratoria de la ineficacia hacen imperativo el traslado de las aportaciones de manera integral, y al tratarse de un asunto íntimamente ligado con la materialización del derecho a la pensión de vejez, de naturaleza imprescriptible, unívoco tratamiento ha de reconocérsele (SL361-2019).

### 2.3. COSTAS

Sin costas en esta instancia, dado que la sentencia se analizó integralmente en favor de COLPENSIONES en virtud al grado jurisdiccional de consulta.

Las de primera instancia se confirman, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., por no haber sido materia de apelación.

## 3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### RESUELVE:

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia materia de apelación y de consulta proferida el 10 de noviembre de 2022 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.


**SEGUNDO: SIN COSTAS** en esta instancia. Las de primera instancia se confirman.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogiendo el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


**Comuníquese, notifíquese y cúmplase.**



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado Ponente



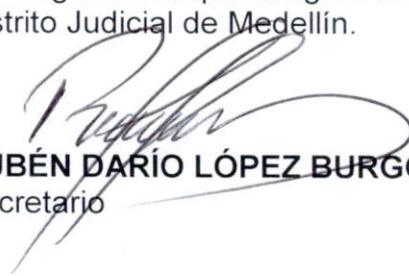
CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada

**CONSTANCIA SECRETARIAL**

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
Secretario